

CAPÍTULO XXIX

EDITORIALES DISIDENTES Y EL LIBRO POLÍTICO

Carmen MENCHERO DE LOS RÍOS

«Parece al pronto que el papel arde fácilmente. Pues no es así [...] ¿será por las ideas que lleva dentro?»¹.

LOS RIESGOS DE «TENTAR EL TECHO DE LO EDITABLE»

Fechado en 1968, un informe del Ministerio de Información y Turismo (MIT) constataba el «vertiginoso aumento» de la producción editorial española que aproximaba a 13.000 el volumen de títulos publicados en el último año, dentro de una curva ascendente desde 1966. Pero, por encima de la cifra, el documento destaca un cambio cualitativo en la actividad de editores que, amparados por la «Ley Fraga» y la desaparición formal de la censura previa, aspiraban a «tentar el techo de lo editable» a la sombra de una literatura de ensayo de inspiración marxista que requería un ejercicio de control compatible con el pretendido espíritu aperturista del marco jurídico:

«Se ha procurado distinguir entre la literatura marxista de propaganda proselitista y subversiva (que se ha frenado fuertemente) y la que corresponde a zonas más informativas y expositivas, de cuyo conocimiento no puede privarse a los españoles sistemáticamente. El prestigio de lo tan drásticamente vetado se-

¹ Fragmento de la novela *Las últimas banderas* de Ángel María de Lera, Barcelona, Planeta, 1982, p. 366.

ría tremendo. No hay razón alguna para que ciertos textos de Marx no puedan ser editados en España. La ceguera no parece el mejor procedimiento para combatir al marxismo»².

En este contexto cobra protagonismo a lo largo de la década de los sesenta, y sobre todo en los setenta, el «libro político», vinculado a una demanda en proceso de cambio y a la aparición de editoriales con proyección minoritaria pero muy activas, decididas a renovar la oferta bibliográfica con la presencia de textos y autores inimaginables años atrás³.

Sorteando el complejo engranaje de supervisión articulado a través de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, con la colaboración de organismos complementarios a la acción del MIT (Oficina de Enlace, Sección de Inspección de Librerías, Estafetas y Aduanas, etc.), estas editoriales desarrollaron distintas tácticas orientadas a calibrar las probabilidades de éxito con cada obra y en cada momento, al compás de la cambiante permisividad de distintos gabinetes ministeriales, extremadamente sensibles a la coyuntura política y los picos de conflictividad social.

Figuras relevantes de la vida pública, de muy heterogénea filiación ideológica, pero activamente comprometidos con la reivindicación de un cambio en el modelo vigente, promovieron proyectos editoriales con una marcada vocación pedagógica, al tiempo que simpatizantes y militantes de organizaciones políticas se implicaron en la creación de empresas con un discurso abiertamente disidente. Unos y otros abordaron una intensa labor de difusión centrada en la renovación de la oferta editorial con una cuidada selección de temas y autores, presentados con un formato y precio tan asequible como fuera posible y ampliados por interesantes prólogos, epílogos y anotaciones. Por ello, más allá del texto o su autor, la propia edición de la obra y la tirada de ejemplares propuesta, en combinación con el precio al que se ofertaba en el mercado, constituían aspectos minuciosamente examinados por los servicios de Ordenación Editorial a la hora de evaluar el potencial efecto agitador de una publicación.

En un marco de reivindicación social y disputas internas en el seno del franquismo, el estado de excepción de 1969 dio pie a la aplicación del artículo 3 de la Ley Fraga, restableciendo la censura previa expresa que se saldó con el cierre de cuatro editoriales y el secuestro de obras ya a la venta en las librerías⁴. Las colec-

² *Aplicación de la Ley de Prensa e Imprenta: Informe sobre la Producción Editorial Española*, AGA, Cultura, 587.

³ Ilustrativo en este sentido es el comentario de Baltasar Porcel sobre «la cantidad de libros marxistas que hay en el país (es uno de los países de Europa donde más literatura marxista vemos en los escaparates de las librerías)». BENEYTO, 1977, p. 130.

⁴ El INLE publicó diversas circulares prohibiendo la difusión en todo el territorio nacional de listados de títulos. Un ejemplo de ellas es la *Circular número 43/69 de 28 de abril de 1969*. Asunto: *Suspensión de Varias Publicaciones*, AGA, Cultura, 71/11627. El documento hace referencia a circulares anteriores con el mismo asunto (14/69 y 14/69bis, del 6 y 11 de febrero del

ciones en ciernes fueron cedidas a empresas afines, observándose una progresiva radicalización de las editoriales más conflictivas que decidirán paulatinamente prescindir del filtro de la consulta voluntaria, arriesgándose a presentar los títulos directamente a depósito amparadas por el temor de la Administración al eco mediático de un secuestro y por el sobreesimiento judicial de buen número de las denuncias. Ante esta situación, los servicios del MIT no ocultaron su alarma:

«Más todavía — y es el punto en el que queríamos insistir — podemos afirmar plenamente que, a pesar de aquilatarse hasta el extremo por parte de la Administración los secuestros y las denuncias que se efectúan a la Autoridad judicial, nos encontramos con la sorpresa de que sólo en un pequeño porcentaje de los casos, se acepta por aquella nuestras alegaciones.

Esta situación produce inquietud e inseguridad, por lo problemático que resulta el hecho de impedir la difusión de algún libro»⁵.

Tras el estado de excepción, el material de archivo revela una interesante actividad de seguimiento cuantificando de forma comparativa el volumen de obras sometidas a consulta respecto a las presentadas directamente a depósito, junto con denuncias y secuestros, detallando cualitativamente el cariz de las actuaciones emprendidas, en las que ocupa un lugar destacado la alusión expresa a motivaciones de orden político.

El nombramiento de Pío Cabanillas como ministro de Información y Turismo en enero de 1974, con Ricardo de la Cierva como director general de Cultura, aporta un soplo de renovación al mercado editorial con la ampliación de la oferta bibliográfica gracias a la denominada «consulta oficiosa», que introduce la supervisión personal de las obras más críticas por parte del máximo responsable del organismo. Algo más benevolente que el propio cuerpo de lectorado, este reducto de aperturismo, al margen de los cauces formales articulados dentro de un gobierno de signo inmovilista, no fue óbice para elaborar, en junio de 1974, un listado de editoriales conflictivas que la Dirección General de Seguridad completaba con detallados informes policiales sobre las figuras implicadas en estos proyectos. Todas las empresas habían logrado su inscripción en registro pero Ordenación Editorial identificaba en ellas elementos de riesgo en un contexto de protesta estudiantil y creciente conflictividad interna, a la sombra del nacimiento en París de la Junta Democrática de España y las alarmantes noticias que llegaban de la vecina Portugal.

mismo año) e indica expresamente que la prohibición aplicaba a dichas obras y no a otras de los mismos autores o editoriales.

⁵ *Nota Informativa sobre la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley de Prensa e Imprenta en la tramitación de expedientes de publicaciones unitarias por la Sección de Ordenación Editorial*, AGA, Cultura, 48.806. El informe, fechado en abril de 1970, denuncia que de 77 expedientes presentados a la autoridad judicial, 45 se habían sobreesido y 21 aún se encontraban en trámite.

La relación constaba de doce empresas⁶, convenientemente clasificadas por su grado de activismo, siendo muy elocuentes sus calificaciones, no sólo de la diversidad de movimientos disidentes, sino, sobre todo, de la percepción de este fenómeno por parte de la Administración:

- *Antecedentes favorables*: Gráficas Espejo.
- *Sin antecedentes*: editoriales Castellote, Fenicia y Fundamentos (en este último caso «sin antecedentes directos»).
- *Personal desafecto*: editoriales Ayuso, Alberto Corazón («desafecto, relación con elementos comunistas») y Artiach («antecedentes desfavorables, ideología comunista»).
- *Algo conflictivo*: editorial Akal y Guadiana («línea demócrata-cristiana, con alguna conflictividad»).
- *Conflictivo*: Brias Pinto; editoriales Zero («personal conflictivo») y Seminario y Ediciones («con personal conflictivo. Figuran los nombres de Camilo José Cela, Laín Entralgo, López-Aranguren, Raúl Morodo, Dionisio Ridruejo, Prados Arrarte, Ruiz Jiménez, Tierno Galván, Zayas, Mariategui, etc.»).

«Desafecto» y «conflictivo» son apelativos que marcan la distancia entre la mera discrepancia y la disidencia abierta, vinculada a la protesta y la difusión de un discurso alternativo al oficial, desde posicionamientos muy dispares. La presencia de intelectuales y figuras de la vida pública venía a recoger el guante de una tradición de compromiso social que, en mayor o menor grado, condujo en estos años a un activismo político del que fueron emblema buena parte de los nombres mencionados en el informe, particularmente en relación con el Seminario y Ediciones, con figuras como Tierno Galván, en un extremo, y Ruiz Jiménez, en el otro, pasando por Dionisio Ridruejo, junto a Laín Entralgo, Camilo José Cela o López Aranguren.

EL «LIBRO POLÍTICO» COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO

El eco del espíritu regeneracionista de comienzos de siglo se amplifica en estos años a la sombra del debate sobre el compromiso político del intelectual y el papel de la cultura como elemento de transformación con vocación eminentemente pedagógica. Aquellas librerías, que en los albores del siglo xx contribuyeron activamente en la creación de estados de opinión dentro de una incipiente sociedad de masas, dan paso en la última década del franquismo a iniciativas editoriales con proyectos que, desde muy distintas motivaciones

⁶ MARTÍNEZ MARTÍN, 2011, pp. 127-141.

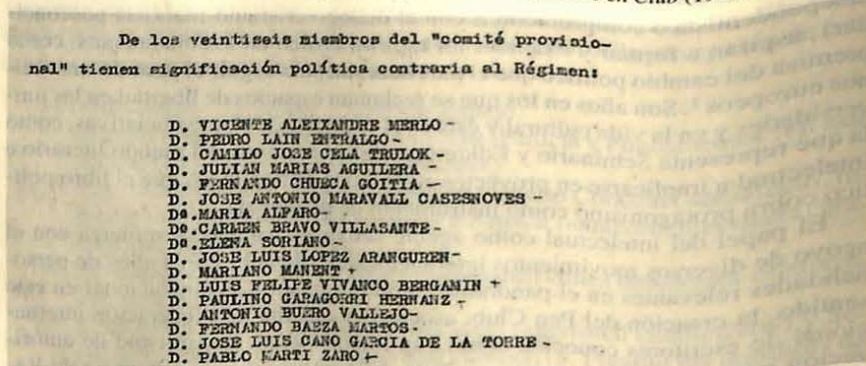
(académicas o vinculadas a formaciones políticas en la clandestinidad, de tinte independentista o comprometidas con el diálogo cristiano-marxista posconciiliar), aspiran a formar y extender un espíritu crítico en los ciudadanos, como premisa del cambio político que el país necesita para seguir el paso de sus vecinos europeos⁷. Son años en los que se reclaman espacios de libertad en las universidades y en la vida cultural y éste es el contexto en el que iniciativas, como la que representa Seminario y Ediciones, llevan a figuras del mundo literario e intelectual a implicarse en proyectos editoriales dentro de los que el libro político cobra protagonismo como instrumento de disidencia.

El papel del intelectual como agente activo de cambio se refuerza con el apoyo de diversos movimientos internacionales y la adhesión a ellos de personalidades relevantes en el panorama cultural español. Cabe mencionar en este sentido, la creación del Pen Club, asociación adscrita a la federación internacional de escritores conocida como Pen Internacional. La solicitud de autorización para constituir la rama española, bajo la presidencia honoraria de Ramón Menéndez Pidal, fue presentada en 1965 por Fernando Chueca, director del Museo Contemporáneo, el catedrático José Antonio Maravall y el escritor José Luis Cano, secretario de la revista *Ínsula*, poniendo en alerta a la Oficina de Enlace que se apresuró a investigar el cariz ideológico tanto de la asociación como de sus integrantes, con el temor de que la iniciativa pudiera ser utilizada como «instrumento político por parte de grupos de significación contraria al régimen». La documentación que se conserva contextualiza el concepto de disidencia desde la perspectiva de los servicios de información del MIT, integrando bajo el calificativo de «significación política contraria al régimen» tanto a personalidades con «marcada tendencia izquierdista o marxista» como a otras «de significación política más moderada» y, en cualquier caso, deja patente el activismo crítico de un colectivo con planteamientos ideológicos muy dispares, coincidente, no obstante, en la reivindicación de un proceso de cambio político que se perfila como imprescindible.

Dos años más tarde, cinco de los nombres citados en la anterior relación volverán a aparecer en una nota informativa incluida en el expediente abierto en abril de 1967 para la inscripción en el Registro Editorial de la Sociedad Editorial de Escritores, S. A. (SEDE), acompañada de un informe sobre los antecedentes políticos de su presidente, Fernando Chueca Goitia y quince de sus accionistas, entre los que se encontraban José Antonio Maravall, Pablo Martí Zaro, Paulino Garagorri, Pedro Laín Entralgo y Luis Felipe Vivanco, acompañados de otras figuras de relevancia pública como Julio Caro Baroja o Dionisio Ridruejo⁸.

⁷ En relación con la configuración del «intelectual» como voz autorizada dentro de una incipiente sociedad de masas en los inicios del siglo xx, véase MARTÍNEZ MARTÍN, 2001d, pp. 557-572.

⁸ Nota informativa fechada el 26 de mayo de 1967 acompañando el expediente de inscripción.

Gráfico I. Extracto del Informe muy reservado sobre el Pen Club (1965)⁹

Los nombres que figuran en ambos listados coinciden en informes similares elaborados en distintas circunstancias por organismos vinculados al MIT, dando fe de la beligerancia de un colectivo que, ya sea desde la orilla del compromiso social o al amparo de una militancia política expresa, libra la batalla contra el discurso oficial en la arena de la cultura, arribando en el sector editorial con iniciativas dentro de las cuales el libro político adquiere un valor esencial como instrumento de formación e información. Ilustrativo es en este sentido el testimonio de Dionisio Ridruejo al ser interrogado sobre distintos aspectos de la censura española:

«[El pueblo español] está desentrenado y la conciencia ciudadana sufre un grave embotamiento, porque las ideas no circulan y la práctica es imposible. Pero el pequeño aflojamiento de grilletes que se ha contemplado en el último año ha determinado un consumo exuberante de literatura política — libros o semanarios —, lo que indica que la pasividad representaba un déficit de oferta y no de demanda»¹⁰.

⁹ ción de SEDE en el Registro de Empresas Editoriales (Instancia con fecha de entrada, abr-6-67). Puede consultarse una reproducción del listado citado y del Informe sobre «Sociedad Editorial de Escritores (SEDE)», incluido en el mismo expediente, en el apéndice 4 de MENCHERO, 1994.

⁹ El documento alude a las «tendencias más moderadas, aunque no identificadas totalmente con el régimen», de otras personalidades como José María Pemán o «sin significación política disidente» en otros casos como el de Dámaso Alonso Fernández Redondo. Informe muy reservado sobre el PEN CLUB presentado por la Oficina de Enlace del Ministerio de Información y Turismo con fecha 9 de julio de 1965, AGA, Cultura, 87.421. El expediente incluye la Nota 92.11 dirigida al Ministro de Información y Turismo por la Dirección General de Seguridad, fechada el 13 de diciembre de 1962 con el asunto El PEN Internacional en apoyo de los escritores catalanes y españoles.

¹⁰ BENEYTO, 1977, p. 159.

Decididas a ampliar la oferta bibliográfica requerida por una demanda en proceso de reconversión, nacen a lo largo de la complicada década de los sesenta una serie de empresas que supeditan su rentabilidad económica al éxito de proyectos editoriales no necesariamente especializados en obras de pensamiento, pero en los que encuentra cabida el libro político como catalizador de movimientos disidentes de distinto signo, siendo el principal exponente (aunque no exclusivo) de un espíritu crítico que supera al ámbito de lo estrictamente político. Por ello este género encontró cabida también en las colecciones de otras editoriales más interesadas en movimientos culturales y artísticos de vanguardia, como pueda ser Seix Barral, Barral Editores. Kairos o Lumen, haciéndose eco de la politización creciente de determinados sectores de la sociedad, al compás de la agitada actualidad nacional e internacional y una corriente crítica que tiene su reflejo también en la literatura mediante géneros como el de la «novela testimonio», nada complaciente con la visión de la realidad que se promovía desde el plano institucional¹¹.

Más allá de un simple subgénero dentro de la literatura de pensamiento, es cierto que el libro político cobra protagonismo aupado por la actividad de editoriales con vocación reivindicativa, pero sobre todo se desarrolla al calor de un importante cambio en la demanda, que se hace patente por la presencia puntual de este tipo de temáticas en los catálogos de editoriales marcadamente comerciales, sensibles al tirón de mercado de este tipo de obras¹².

En este sentido, y sólo por citar un ejemplo, podemos recordar a la editorial Ricardo Aguilera, empresa familiar que venía desarrollando su actividad desde los años cuarenta publicando libros de ajedrez, con la iniciativa de sacar al mercado la colección «Orbe» por la que el lector podía adquirir a 30 pesetas textos de Marx. Su número de inscripción fue cancelado en registro y tuvo que esperar un año para volver a publicar, recuperando la inocua temática del ajedrez, aderezada con algún otro título de escasa conflictividad¹³.

¹¹ La novela social fue percibida por la Administración como de abierta disidencia. Sirvan de ejemplo afirmaciones como las que aparecen en un informe de la Sección de Ordenación Editorial fechado el 25 de mayo de 1970: «La indicación de que son enemigos del Régimen ya la hago para quien sepa entender, al englobarlo en el realismo social». Nota confidencial sobre el artículo «La novela española. La generación de 1923-1930» de Antonio Iglesias Laguna, publicada en el número 2 de «España Hoy», AGA, Cultura, 49.098. El informe incluye una recopilación del activismo disidente de autores como Juan Goytisolo, Caballero Bonald, López Salinas, Ana María Matute y el propio Luis Martín Santos, como principal exponente de la novela testimonio con su obra *Tiempo de Silencio*.

¹² A modo de ejemplo, podemos recordar la relativa audacia de editoriales por completo ajenas a cualquier atisbo de disidencia, aventurándose a publicar títulos tan sugerentes para la época como *Se busca Rey en buen estado* de Álvaro de la Iglesia, que Planeta presentó en tres ocasiones obteniendo en todas ellas el silencio administrativo por respuesta (expedientes 9106-68, 10240-68 y 10241-68). Aplicación de la Ley de Prensa e Imprenta: Informe sobre la producción editorial española, AGA, Cultura, caja 587.

¹³ Esta editorial protagonizó una de las más célebres anécdotas de la censura en esta época con la táctica de presentar bajo el título *Un fantasma recorre Europa* el texto del *Manifiesto Co-*

CAMBIO CULTURAL Y RECONVERSIÓN DE LA DEMANDA BIBLIOGRÁFICA

La paulatina transformación del modelo económico se tradujo en la década de los sesenta en un profundo cambio del tejido social acompañado de nuevas pautas de comportamiento individual y colectivo, en un contexto donde la educación —y por extensión la cultura— se percibía como icono de progreso, al compás de la significativa ampliación en los niveles de alfabetización y un notable incremento en las cifras de universitarios.

Paralelamente, la aparición de nuevas fórmulas sindicales y de movilización va conformando una cultura propia de cierta relevancia en el ámbito obrero, teniendo en cuenta que este colectivo representaba, a la altura de 1970, un tercio de la población activa. Asimismo, surge una nueva clase media formada por profesionales liberales, cuantitativamente modesta, pero tremendamente influyente por su activismo cultural y social, al tiempo que un precipitado proceso de urbanización daba pie a la movilización de asociaciones vecinales, contribuyendo todo ello a alimentar una espiral de conflictividad patente en el ámbito obrero, universitario y urbano.

El cambio cultural se completa con una mayor proximidad a la realidad exterior, de la mano del turismo y los medios de comunicación de masas, y fenómenos adyacentes como la paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral y la secularización creciente de la sociedad, alimentada por el activismo social de parte del clero más joven, al calor del Concilio Vaticano II y el diálogo cristiano-marxista, muy en boga en aquella época.

La movilización social en distintos ámbitos contó con el aliento de organizaciones políticas clandestinas, dentro de las cuales tuvo especial protagonismo el Partido Comunista, al que se sumó el apoyo de los sectores más progresistas de la Iglesia. En virtud de su vertiente formativa y reivindicativa, el libro político tiene una presencia notable en el fondo bibliográfico de las editoriales más beligerantes, permeables a través de la militancia de sus accionistas y colaboradores, al afán de estas formaciones por impulsar una creciente corriente de oposición antifranquista.

En este sentido, recordemos el caso de Ciencia Nueva, emblema de las editoriales disidentes que convirtieron al libro político en su principal seña de identidad. Matiz distinto tuvo la actividad de ZYX, que, partiendo de posicionamientos ideológicos cercanos a HOAC y JOC, planteaba un proyecto de oposición desde la perspectiva del cristianismo más progresista. Sensible a la problemática del mundo obrero y sus carencias formativas, en línea con los pos-

munista. El informe de lectorado deja patente la indignación de los servicios de Ordenación Editorial que, obviamente «desaconsejaron» la publicación. AGA, Cultura, 10700-68.

tulados del Concilio Vaticano II, hizo de su nombre emblema de esta vocación escogiendo las últimas letras del abecedario en alusión a la cita bíblica «los últimos serán los primeros». Muy beligerante, siguió la táctica de eludir cualquier filtro previo, recibiendo como contrapartida continuas denegaciones que asfixiaban su viabilidad económica como empresa. Nunca obtuvo el número de registro y aunque desde 1968 se vio obligada a presentar los textos a consulta voluntaria para continuar su actividad, ésta fue prohibida un año después. Su producción se dirigía principalmente al ámbito obrero, aunque tenía cierto impacto en círculos estudiantiles. Incluso tras su cancelación hay constancia de la distribución de obras de esta editorial entre trabajadores españoles residentes en Bélgica con la consecuente alarma del Instituto Español de Emigración, que se apresuró a informar del hecho al MIT, adjuntando una relación de obras en que aparecen títulos tan evocadores como *Angustias y esperanzas del proletariado* o *Asturias frente a su reconversión industrial* junto con *Iván, el imbécil* de León Tolstoi o *Marxismo y antimarxismo* de Julián Besteiro¹⁴.

La vinculación de esta editorial con Zero reforzó la vocación por distribuir su catálogo más allá de una minoría intelectualmente formada, cuidando la presentación de los títulos en formatos y precios asequibles, objetivo que no pasó desapercibido para las autoridades, que la acusaron de publicar obras de temática subversiva, «a precios módicos, incluso en la vía pública». El caso de Zero ilustra la existencia de una juventud contestataria, procedente de sectores sociales acomodados que, en oposición a sus mayores, se muestra cada vez más comprometida y con un activismo político creciente. Su actividad perderá sentido cuando las circunstancias políticas cambien y se produzca el consiguiente «descenso de interés por parte del público», tal y como declaraba la propia editorial, ya bajo la marca Zero-ZYX, cuando años después, ya en plena democracia, desaparezca¹⁵.

Ya sea con vocación pedagógica, en aras de fomentar corrientes de pensamiento crítico, o bajo la instrumentalización del libro como elemento activo de disidencia, lo cierto es que la demanda del libro político (independientemente de la voluntad de informar, formar o incitar) procedía en buena medida del ámbito universitario, por la influencia del marxismo en la literatura de ensayo y por el impulso decidido de un nutrido grupo de intelectuales y profesores universitarios que llevaron su compromiso intelectual al campo del activismo político desde distintos posicionamientos ideológicos. Cabe citar en este sentido la actividad de la editorial Guadiana (así como Edicusa, a partir de la revista *Cuadernos para el Diálogo*) en el campo de la democracia cristiana, con Ruiz Jiménez a la cabeza, implicado también en el proyecto de SESA (Seminarío y Edicio-

¹⁴ *Obras de la Editorial ZYX de España en Bruselas*, 30 de enero de 1970, AGA, Cultura, 49.085.

¹⁵ MARTÍNEZ MARTÍN, 2011, pp. 129-132.

nes), contando con la colaboración de figuras de distinto signo político como era el caso de Dionisio Ridruejo, Tierno Galván, López Aranguren o José Antonio Maravall, entre otros, vinculados también a iniciativas como el PEN y la Sociedad Editorial de Escritores (SEDE).

Fruto de su actividad, vieron la luz colecciones con títulos y autores que aspiraban a cubrir distintos campos, principalmente en el ámbito de las humanidades, con la publicación de obras de sociología, historia social, economía, filosofía, religión, derecho o pedagogía, orientadas a equiparar el bagaje cultural de los universitarios españoles con el de sus vecinos europeos, bajo el trasfondo de la crítica antifranquista.

Fundamental en este sentido fue el esfuerzo por importar y traducir obras extranjeras que completaran el panorama editorial español y la penetración de corrientes de pensamiento fuertemente influidas por el marxismo. Los informes del MIT muestran un volumen superior de obras de importación (no científicas o técnicas) a la producción nacional examinada por los servicios de lectorado, con un porcentaje de denegación que, en 1970 y 1971, oscilaba entre el 13,35 y el 14,8 por 100, alegando de nuevo expresamente «motivaciones políticas» en buena parte de los dictámenes de los censores¹⁶.

La «explosión estudiantil» a la que hacían referencia los informes Foessa, que, según fuentes oficiales, había triplicado en 1976 el número de matriculados respecto al curso 1967, pasando de 115.590 matriculados en septiembre de este año a 349.471 alumnos en el curso 1976-1977, constituyó el mercado prioritario de estas editoriales, centrando la demanda en títulos y autores relevantes en distintos campos del saber y un buen número de traducciones y obras de importación que aspiraban a promover el contacto con las corrientes de pensamiento y vanguardia artística de más renombre en el exterior. En paralelo, la creciente movilización sindical propició, por distintos circuitos de distribución, la llegada al entorno de las fábricas de otros títulos de contenido y formato más acordes con este público lector, al tiempo que el ciudadano medio, ajeno a uno y otro ámbito, se encontraba entre los destinatarios de publicaciones sobre la actualidad política internacional, presentes también en los catálogos de estas editoriales. La primavera de Praga, la revuelta universitaria del mayo francés o la Guerra del Vietnam, junto a temáticas hasta entonces proscritas, principalmente en el plano moral, formaron parte de los intereses de los lectores más inquietos, constituyendo la extensión del libro de bolsillo la fórmula más eficaz de formación e información.

Editoriales catalanas de marcado tinte disidente encontraron permanentemente dificultades, discurriendo su actividad bajo la atenta mirada de los servicios de Ordenación Editorial, viéndose obligadas a presentar de forma siste-

¹⁶ Acciones de vigilancia y control en los sectores de libros, cinematografía, teatro y publicidad. 1970-1971, AGA, Cultura, 580.

mática sus originales a consulta voluntaria y asumiendo el riesgo de eventuales denuncias y secuestros para las obras que ponían en circulación bajo la figura de «silencio administrativo». Éste fue el caso de Edicions 62, por citar una de las empresas más relevantes, que sólo en 1968 vio denegada la publicación a 28 de sus obras, distribuyendo cinco títulos en aquel año bajo silencio administrativo. La empresa vinculaba su actividad a la defensa de la lengua y la cultura catalanas, aunque contaba también con una importante línea de publicación en castellano a través de la editorial Península. Nacida en 1963, esta última protagonizó un largo trámite de inscripción que se extiende desde 1967 hasta 1972, en consonancia con la estrategia de imponer innumerables trabas administrativas y demoras interminables para cualquier gestión relacionada con editoriales que, como era el caso, resultaran sospechosas de «filocomunismo»¹⁷.

EL PRECIO DE LA DISIDENCIA

Pese a su carácter minoritario, estos proyectos directamente comprometidos con la realidad sociopolítica de aquellos años, o sensibles a ella dentro de una línea editorial más amplia, protagonizaron titánicos esfuerzos por completar el exiguo panorama editorial español con títulos orientados a fomentar, en distintos ámbitos, una visión crítica de la realidad a través de colecciones cuidadosamente planeadas en contenido y formato. La iniciativa no arranca de la década de los sesenta, pero es a partir de entonces cuando aumenta exponencialmente el número de empresas al compás del propio crecimiento en la producción editorial y la relativa mayor permisividad en las publicaciones.

La editorial Ariel, tanto por su línea editorial como por la trayectoria política de varios de sus colaboradores, vinculados al PSUC, estuvo en el punto de mira del MIT, debiendo sortear numerosas dificultades para sacar adelante su proyecto cultural, algo que sólo podía lograrse insistiendo en una negociación permanente con las autoridades, vía telefónica y correspondencia extraoficial, como antídoto contra la estrategia institucional de ahogar por demora la actividad de editoriales incómodas. Estas medidas no eran en absoluto excepcionales, y en no pocas ocasiones eran alentadas desde los propios servicios del MIT, para paliar el riesgo de una denuncia que podría resultar sobreseída cuando era tramitada por los tribunales de justicia, pasando por alto el quebranto económico que suponía obligar a las editoriales a realizar cambios o supresiones en una tirada ya publicada¹⁸.

¹⁷ Véase *infra* el capítulo XXX.

¹⁸ En el documento titulado *Nota sobre Negociación con Editoriales*, fechado el 16 de septiembre de 1970, se afirma: «Desde el punto de vista de nuestro Departamento, estas soluciones nos ahorran el natural desgaste ante la autoridad judicial, a la que, a mi juicio, debe recurrirse so-

Al margen del silencio administrativo y demoras interminables, la ley tenía previstas acciones punitivas mucho más contundentes, de manera que en un año tan conflictivo como 1968 tienen lugar 443 denegaciones en los que la Administración considera como tales también 183 «no conformidades» y 32 denuncias. Deducimos el protagonismo del libro político (entendido en un sentido amplio) en estas actuaciones a partir de los datos del propio Ministerio, que cifra en 148 las obras rechazadas por «motivos políticos» en un total de 228 obras denegadas expresamente. Ahondando en estas motivaciones encontramos desglosados en epígrafes independientes, las denuncias bajo la acusación de «Literatura y propaganda marxista», junto con ataques a las «Leyes Fundamentales, Instituciones y Orden Público» y, en apartado distinto, ofensas a la «Institución Armada». Con gran elocuencia, el informe expresa la preocupación por obras de carácter marxista, dando especial relevancia en su argumentación a la literatura de «inspiración castrista, por ser la de mayor capacidad de sugestión, incluso romántica».

A continuación figura la relación de obras, autores y editoriales, con un especial protagonismo en el volumen de rechazos de Edicions 62 (posicionada en la izquierda catalanista), seguida de Ciencia Nueva (icono de las editoriales disidentes de inspiración marxista) y ZYX (en línea con la protesta sindical desde el cristianismo obrero), junto a Grijalbo, Crítica y Fontanella. Ciertamente, proponer en 1968 la publicación de títulos como *La revuelta estudiantil*, *El libro negro de las jornadas de Mayo* o *Rosa Luxemburg: pensamiento y hechos* era una apuesta cuanto menos audaz, protagonizada, en este caso, por la editorial Crítica¹⁹. No menos polémicos resultaban para la época títulos como *Mecanismos del poder en América Latina* o *Francia: mayo 1968*, por citar sólo dos de los títulos presentados a depósito previo a lo largo de 1968 por la editorial barcelonesa Edima (Edición de Materiales) hasta que, en ese mismo año, se le prohíbe continuar la actividad por no haber formalizado su inscripción en el Registro Editorial, lo que convertía en clandestina la distribución de sus obras²⁰.

En enero de 1969 culmina una espiral de movilización creciente que llegó a su punto álgido con la muerte de Enrique Ruano, saldándose con la declaración del estado de excepción en todo el territorio por tres meses, con la intención de contener la protesta descabezando todo conato de oposición. El mundo editorial fue fiel reflejo de lo ocurrido en otros ámbitos y, más allá del restablecimiento de la

lamente en casos extremos y muy claros». Interesante en este sentido la correspondencia de Ariel en los años 1971 y 1972 con distintas autoridades, interesándose por el estado de la tramitación de sus obras. AGA, Cultura, 49.085.

¹⁹ *Aplicación de la Ley de Prensa e Imprenta: Informe sobre la producción editorial española (1968)*, AGA, Cultura, 587. Encabeza la lista, junto a Edicions 62, Bruguera, en todos los casos con novelas de bolsillo cuyos expedientes levantaron las suspicacias de la censura más por temas morales que políticos.

²⁰ AGA, Cultura, 4895-68.

censura previa expresa, prevista por el artículo 3 de la Ley Fraga, la crisis se saldó con el secuestro de treinta publicaciones ya distribuidas por las librerías²¹ y la cancelación de la actividad para cuatro editoriales: Ricardo Aguilera, Equipo Editorial, Halcón y Ciencia Nueva, al tiempo que ZYX, Edicusa y Nova Terra se encontraban abocadas a correr la misma suerte por el asedio sistemático de su actividad desde el MIT. Las cancelaciones se basaron en el incumplimiento por parte de las empresas de la obligación de informar semestralmente de los cambios existentes en el plan editorial reflejado en sus solicitudes de inscripción, salvo en el caso de Ciencia Nueva, donde se alegaron distintos problemas relacionados con la ausencia de datos sobre el patrimonio de la empresa y la acreditación del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus accionistas.

Halcón y Equipo Editorial formaban parte del *boom* editorial de 1968, tratándose en ambos casos de empresas familiares guiadas por el propósito de desarrollar un proyecto cultural orientado a la difusión del pensamiento marxista, llegando a pagar un alto precio por ello. Halcón, editorial madrileña inscrita en el Registro Editorial en mayo de 1968 con el número 675, estrenó su actividad con la denegación ese mismo año para 8 de las 23 obras presentadas, pudiendo distribuir cuatro bajo silencio administrativo y siendo denunciadas a la fiscalía otras cuatro. Al año siguiente la situación empeoró: intentó publicar 13 obras pero 9 fueron denegadas y a una se le aplicó el silencio administrativo. La Administración ignoró sus alegaciones y la referencia a los «graves e irreparables perjuicios económicos que la cancelación acordada ocasiona a la empresa», desestimando finalmente el 13 de octubre de 1970 el recurso de alzada presentado por la editorial²².

Otro tanto ocurrió con Equipo Editorial, empresa donostiarra que se inscribió en junio de 1968 con el número de registro 645, declarando su intención de publicar en castellano y vasco cuentos infantiles y obras relacionadas con el amplio campo de las ciencias sociales. Tras una breve referencia a la debilidad de su plan financiero, la desestimación del recurso presentado por la empresa contra su cancelación hace referencia expresa a los títulos publicados en 1968 (con la presentación de 17 obras que dieron lugar a dos denuncias y un alto porcentaje de textos denegados y bajo silencio administrativo) y 1969 con tres títulos, todos ellos denunciados. La acusación de seguir una «línea tendenciosa» aportando datos «insuficientes e inexactos» para lograr difundir «doctrinas revolucionarias, pero desorientando a la opinión pública, favorecer, sino promover, la subversión social» no dejaba lugar más que para ratificar, el 7 de diciembre de 1970, la cancelación de la empresa²³.

²¹ La relación de títulos es reproducida en la obra de CISQUELLA, ERVITI y SOROLLA, 2002, pp. 79-80.

²² AGA, Cultura, 49.093.

²³ *Ibid.*

Tanto Halcón como Equipo Editorial pretendieron, sin éxito, aprovechar la ventaja que suponía el haber obtenido, a diferencia de Ciencia Nueva, el ansiado número de registro, por lo que se proponían publicar títulos presentados por aquella editorial que habían sido desestimados bajo una consulta voluntaria que, al carecer de inscripción, no podía eludir. El resultado, no obstante, fue idéntico para las tres, con la única diferencia de que Ciencia Nueva sí presentó un plan editorial lo suficientemente detallado como para no lograr obtener nunca el número de registro.

De hecho, Ciencia Nueva constituye un caso ejemplar del recurso al ordenamiento jurídico como coartada para la acción punitiva de las instituciones sobre la producción cultural, a través del arduo y prolongado proceso que se abre en febrero de 1967, con su solicitud de inscripción, y se extiende hasta la desestimación de la misma en marzo de 1969, iniciándose un calvario de recursos y tentativas de reinscripción igualmente infructuosas. La editorial madrileña había sido fundada en 1965 con muy escasos recursos por doce jóvenes universitarios, a los que pronto se unió Jaime Ballesteros y distintas personalidades, como fue el caso de Gustavo Bueno, Roberto Mesa y Antonio Elorza, entre otros, contando con la colaboración de Alberto Corazón para el diseño de las portadas y recayendo la dirección de la empresa sobre Jesús Munárriz-Peralta. Vinculados a grupos activistas universitarios y asociaciones como el Club de Amigos de la Unesco, la mayoría de los socios contaba con antecedentes policiales por su participación en distintos actos de protesta. Los informes del MIT relacionaban la editorial con Rafael Sarro Iparraguirre, máximo dirigente de la sección universitaria madrileña del Partido Comunista, grupo del que también formaba parte Jesús Munárriz y en el que desempeñaba un papel de relevancia Jaime Ballesteros.

La distribución de las publicaciones, por otra parte, se articulaba, fuera de Madrid y Barcelona, sobre la venta por catálogo apoyada en la red de militancia del PCE, con el propósito de desarrollar una «acción minoritaria, pero proyectada hacia la inmensa mayoría, de numerosos grupos juveniles» que, tal y como señalaba Eduardo G. Rico en la bienvenida a la editorial publicada por la revista *Triunfo*, se enmarcaba no tanto en la línea del catolicismo de vanguardia de Nova Terra o Fontanella, sino más bien en la corriente de pensamiento promovida por Ariel o Tecnos, dentro de un proyecto cultural «a favor de una formación crítica y de la extensión de un criterio desmitificador»²⁴.

Con este objetivo, la editorial constituyó una auténtica plataforma cultural que aspiraba a promover la publicación de textos con vocación interdisciplinar, en contacto con corrientes de pensamiento nacional y foráneo, apoyándose en traducciones de calidad. Pionera en el desarrollo del libro político, su labor de

²⁴ La cita se reproduce en el artículo monográfico sobre la editorial elaborado por ROJAS CLAROS, 2005, pp. 103-120. Sobre Ciencia Nueva véase *supra* el capítulo XII.

divulgación se apoyó en un fondo definido por la calidad científica y la variedad temática de sus obras a través de distintas colecciones con gran repercusión en distintos círculos intelectuales. El plan editorial combinaba la introducción en España de obras emblemáticas en el pensamiento marxista internacional, a través de la colección «Ciencia Nueva», con la divulgación de la ensayística nacional, desde una perspectiva ideológicamente plural, en la serie «Los Complementarios». Ambas líneas se completaban con «Los Clásicos», con el objeto de recuperar textos de autores críticos con la realidad de su tiempo como Voltaire, Robespierre, Larra, Pi i Margall y, por supuesto, las obras fundamentales de Marx y Engels, prácticamente proscritas desde 1939.

La cuidada selección de textos no desatendía los aspectos formales de la propia edición, fiel a su vocación divulgativa, generando tiradas de entre 3.000 y hasta 5.000 ejemplares, no siendo excepcional la reedición consecutiva de algún título. Su ámbito de difusión fue principalmente universitario y en menor medida obrero, con grandes éxitos en la publicación de títulos señeros. El prestigio de la editorial la convirtió en un referente para iniciativas similares y contó con una amplia red de relaciones dentro del panorama editorial. No sólo editoriales como Halcón o Equipo Editorial recogían el testigo de sus obras desestimadas, sino que proyectos como Edicusa, de innegable prestigio, fueron accionistas y colaboradores de esta editorial, al tiempo que existía una estrecha colaboración con Grijalbo, contando con la tentativa frustrada de promover una filial catalana bajo la marca Ciencia Nova. S. L.

Sólo en 1968 logró publicar 41 obras en sus distintas colecciones, no sin constantes dificultades con la Administración. De un total de 200 títulos proyectados en la historia de la editorial, topó con la denegación de 46 obras y se vio obligada a realizar mutilaciones en el texto de otras 34, atendiendo a las «tachaduras» del cuerpo de lectorado. La estrategia de cumplir escrupulosamente con el marco legal, presentando todos los textos a consulta voluntaria, respondía a la voluntad de sustentar la continuidad de su actividad sobre la garantía de su viabilidad económica, la cual se veía gravemente amenazada por un eventual secuestro.

Los antecedentes políticos de sus accionistas y colaboradores y el impacto de colecciones como «Cuadernos Ciencia Nueva», con libros de pequeño formato y bajo precio, dispararon desde el primer momento la alerta en el MIT, hasta que el 24 de marzo de 1969 comunicó formalmente la «desestimación de su inscripción» en el Registro Editorial. La empresa se apresuró a recurrir esta decisión, demostrando haber aportado los datos requeridos y apelando al «irreparable perjuicio» económico causado y la desmesura en la sanción, al tiempo que denunciaba la «flagrante violación de los principios de economía, celeridad y eficacia» que había sufrido la editorial desde la presentación de su solicitud de inscripción el 16 de marzo de 1967. Dos años de demora a los que se sumó un largo proceso de negociación con el equipo de Robles Piquer, recurriendo incluso a efectuar un viraje hacia una línea más cultural bajo

la dirección de Celso Fernández-Mayo, logrando temporalmente continuar la actividad con una nueva tentativa de inscripción presentada el 29 de octubre de 1969²⁵.

Las disensiones en el seno de la editorial precipitaron la dimisión del nuevo gerente, facilitando con ello que la Administración dictaminase el cierre definitivo de la editorial con la desestimación de su nueva solicitud a finales de junio de 1970, aduciendo formalmente idénticos motivos a los planteados en 1969. La referencia a los «antecedentes sumamente desfavorables» de la directiva de la empresa, junto con su orientación «sistemáticamente marxista» y la campaña en medios de comunicación afines a favor de la editorial, de la que se hizo eco la emisora comunista Radio España Independiente, fueron las auténticas causas del cierre, dejando abierta la posibilidad de emprender acciones aún más contundentes, con un eventual secuestro de títulos ya en venta y llegando a proponerse incluso «la clausura de sus locales y sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiera adoptarse dada la clara filiación comunista de los administradores y socios» de la editorial²⁶. De esta forma, tras la publicación de más de cien títulos, concluyó la trayectoria de una editorial disidente de honda repercusión, tanto por su influencia sobre proyectos afines como por el calado de su aportación en la oferta bibliográfica de aquellos años, pese a las innumerables dificultades entre las que desarrolló su actividad.

No obstante, la presión oficial para realizar cambios en la directiva de las empresas y los largos procesos de negociación no fueron caso exclusivo de Ciencia Nueva. Por citar un ejemplo significativo, la editorial catalana Nova Terra, de inspiración cristiana ligada a la JOC, tuvo una trayectoria similar, haciendo gala de mayor beligerancia con la táctica casi temeraria de presentar los textos directamente a depósito (pese a no haber logrado su número de inscripción) lo que le abocó a un largo proceso de negociación con el Ministerio, en medio de una profunda crisis interna, que sólo logró superar accediendo a sustituir a dos de sus integrantes más activos, Joseph Verdura y Alfonso Carlos Comín, por otros directivos de talante más moderado.

1969 se saldó con la desaparición de varios proyectos editoriales, merced al esfuerzo de la Administración por desarticular todo conato de disidencia en distintos ámbitos sociales y culturales. Se trataba de iniciativas especialmente combativas, como fue el caso de ZYX, editora de alguno de los treinta títulos retirados del mercado durante el estado de excepción, cuyo catálogo fue recuperado por la editorial Zero gracias a unas muy favorables referencias y su vinculación a la burguesía vasca, erigiéndose en heredera de su vocación agitadora y divulgativa.

²⁵ Parte de la documentación correspondiente a los trámites de inscripción en el registro de la editorial se reproducen en el apéndice 8 de MENCHERO, 1994.

²⁶ AGA, Cultura, 49.085.

Sin embargo, el espíritu crítico de estas editoriales no se vinculaba únicamente a sectores próximos al Partido Comunista o a organizaciones católicas progresistas, incorporándose al panorama editorial otros proyectos que, como Edicusa, partían de presupuestos ideológicos próximos a la democracia cristiana. Nacida a partir de la revista *Cuadernos para el Diálogo*, Edicusa aparece en 1965 promovida por el exministro Joaquín Ruiz-Giménez, en el marco de otras iniciativas culturales de similar entidad en las que se implicaron no pocas figuras del mundo intelectual. Con el objetivo de incentivar una corriente de pensamiento crítico que sortease el estricto filtro de la consulta voluntaria para las obras proyectadas, la editorial optó por la estrategia de presentar las obras directamente a depósito, paliando las consecuencias económicas de un eventual secuestro con una política de suscripciones que garantizase su supervivencia en caso de tropiezos consecutivos con la Administración.

Esta estrategia, y su línea editorial basada en colaboraciones de prestigio y textos complejos bajo cuyo mensaje expreso se ocultaba a un claro discurso crítico, dotó a su fondo bibliográfico de un cariz erudito con gran calado en círculos universitarios. El hecho de especializarse en «libros para minorías» no les evitó conflictos con la Administración, llegando a producirse alguna denuncia finalmente sobreesfida por el Tribunal de Orden Público. Pese al «mal café» achacado a la editorial por los censores, el temor a la repercusión mediática de estos incidentes fue la baza jugada por Edicusa para lograr distribuir, aunque fuera bajo silencio administrativo, un título tan llamativo como *Una democracia para España* con una tirada de 5.000 ejemplares²⁷.

La maestría de Edicusa para mantener su actividad sorteando las dificultades impuestas por el marco jurídico le permitió cubrir el vacío dejado por Ciencia Nueva para convertirse en un proyecto puntero dentro de la literatura de ensayo, iniciando su andadura con la publicación de la obra de Jose Luis Aranguren, *Introducción a la moral social española del siglo XIX* y la colección «Divulgación Universitaria», auténtico referente para la época. El estado de excepción acentuó el cerco sobre la editorial, que se vio obligada a partir de ese momento a presentar sus textos necesariamente a consulta voluntaria hasta que logra, con este compromiso, obtener el tan necesario número de registro, tras múltiples dificultades, en 1970²⁸.

La década se inicia con una progresiva radicalización en las editoriales que sobrevivieron a la criba de 1969, acogándose a consulta voluntaria sólo en casos puntuales a fin de tantear un nivel de permisividad muy condicionado por

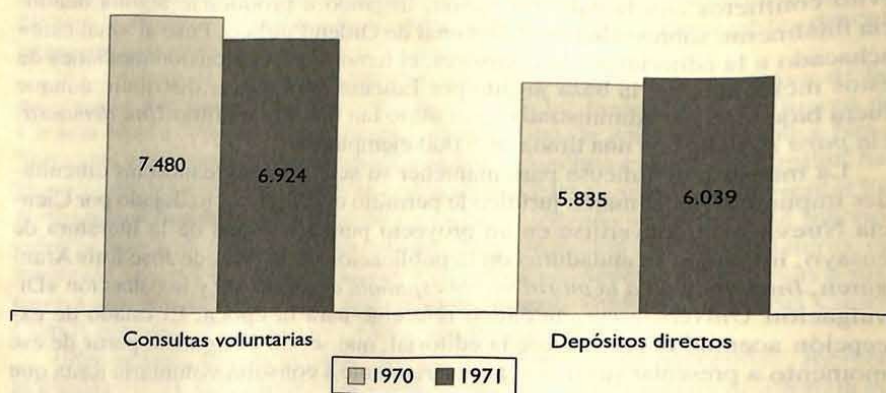
²⁷ La campechana alusión al «mal café de la editorial» al recopilar los textos que forman parte de la obra *La España del siglo XX, vista por extranjeros* aparece en el informe de lectorado de la obra y es el argumento principal que aconseja la circulación de la misma bajo silencio administrativo. AGA, Cultura, 6918-72.

²⁸ ROJAS CLAROS, 2006, pp. 59-80, esp. pp. 67-70.

el talante de cada gabinete ministerial y los sucesos de actualidad. De hecho, los informes del MIT correspondientes al bienio 1970-1971 distinguen claramente en sus cifras el volumen de obras presentadas a consulta voluntaria (14.404) del montante que prescindía de este trámite y acudía directamente a depósito (11.814).

La distancia no era tan importante como pretendía la ley con la institución del recurso a consulta voluntaria, teniendo en cuenta que toda empresa sin número de registro estaba obligada a pasar por este trámite y el compromiso adquirido por editoriales con trayectoria conflictiva que, pese a estar inscritas, se veían obligadas a continuar pasando por este filtro. Más aún si comparamos las cifras de 1970 con las de 1971, momento en el que se constata la tendencia a favor de la presentación directa a depósito, más llamativa por cuanto el volumen total de publicaciones era inferior al del año anterior, mientras que crece el número de denuncias (de 28 a 34) y obras «sin conformidad expresa» tras su depósito (257 en 1970 y 476 en 1971)²⁹.

Gráfico II. Publicaciones unitarias



Esta táctica no era de extrañar teniendo en cuenta que casi un 7 por 100 de las obras presentadas a consulta voluntaria en este período fueron desestimadas (1.031), mientras que entre las presentadas directamente a depósito pudieron circular bajo silencio administrativo 733, registrando tan sólo 62 denuncias. Conscientes de esta tendencia, se producen múltiples quejas por parte de la

²⁹ Acciones de vigilancia y control en los sectores de libros, cinematografía, teatro y publicidad: 1970-1971, AGA, Cultura, 580.

Sección de Ordenación Editorial, que no encontraba refrendada su actividad por la administración judicial, como muestra la carta, fechada en julio de 1970, que el ministro de Información y Turismo dirige a su homólogo en Justicia:

«Otro aspecto muy importante, por sus posibles consecuencias, es que los libros presentados a consulta previa son censurados con nuestro criterio, mientras que los presentados en régimen de depósito acaban gozando de los amplios márgenes de los criterios judiciales»³⁰.

Ya en abril de ese mismo año, Ordenación Editorial, alarmada por esta tendencia, escalaba la situación en una nota informativa donde analizaba los efectos de la aplicación de la Ley de Prensa aportando, «a título puramente informativo», los siguientes datos³¹:

Cuadro I. Expedientes puestos a disposición de la autoridad judicial desde la promulgación de la Ley de Prensa

Prensa	77
Sobreseídos	45
En trámite	21
Procesamiento o destrucción de la edición de acuerdo con el artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	11

El informe sobre la producción editorial en el bienio 1970-1971 muestra datos interesantes, como la creciente actividad de autores convertidos en sus propios editores, que acaparan buena parte de las denuncias y secuestros. Pero, sobre todo, pone en el punto de mira la actividad de empresas como Estela y Anagrama, seguidas de otras firmas (Guadiana y Fundamentos) a las que volveremos a encontrar en el listado de editoriales conflictivas de 1974.

Estela había sido fundada en 1958 con el objeto de divulgar en castellano y catalán textos católicos, encontrando entre 1970 y 1971 denegadas seis de las 19 obras presentadas, publicando varios de los textos bajo silencio administrativo y sufriendo dos secuestros por la publicación de los títulos *Historia del Primero de Mayo* y *Los que nunca opinan*. Entre las obras rechazadas figuraba *Autopista* de Perich, un título críticamente evocador de la obra *Camino* del fundador del Opus Dei. Al contrario que en los casos citados anteriormente, ésta

³⁰ AGA, Cultura, 49.085.

³¹ La información sobre acciones judiciales entre 1966 y abril de 1970 figura en *Nota Informativa sobre la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley de Prensa e Imprenta en la tramitación de expedientes de publicaciones unitarias por la Sección de Ordenación Editorial*, AGA, Cultura, 48.896.

distaba mucho de ser una editorial modesta, tratándose por el contrario de una empresa con proyección nacional e internacional.

Ni este dato, ni la negociación abierta por la editorial con el MIT lograron evitar que, el 29 de mayo de 1971, el equipo de Sánchez Bella acordara cancelar la inscripción número 568 a nombre de esta empresa. Bajo sospecha desde enero de 1969, las obras denunciadas denotan, a juicio de la Administración, «un fuerte contenido subversivo e incitador de la revolución social», lo que, además de suponer en dos ocasiones el procesamiento del editor Ramón Ribó Martí, obviamente les apartaba de un plan editorial teóricamente centrado en obras infantiles y de espiritualidad. Los antecedentes políticos de alguno de los socios obstaculizaron la negociación e incluso la posibilidad de reinscribir la empresa, pese a que en 1972 había retirado el recurso de alzada interpuesto contra la cancelación. No obstante, varios de sus miembros continuaron la actividad editorial bajo el sello Laia, creado en 1971 y que sólo pudo inscribirse en Registro cuando en 1974 se comprometió a presentar sus textos a consulta voluntaria, siguiendo la pauta impuesta en estos casos³².

En este bienio, Anagrama es la editorial que, junto a Estela, acumula el mayor número de rechazos, junto a dos secuestros que en una de las ocasiones le supuso al editor, Jorge de Herralde Grau, un procesamiento, siendo finalmente indultado en septiembre de 1971. La obra que le hizo valedor de tal atención fue *Los Tupamaros* de Antonio Mercader y Jorge de Vera, revisada por Ordenación Editorial bajo el expediente 833-71. Revuelo insospechado levantó también la publicación de la primera obra de Vicente Verdú, *Si usted no hace regalos le asesinan*, en el mismo año, llegando los censores a elucubrar interpretaciones mucho más allá de la intencionalidad real de la obra, causando el incidente tal impacto en el autor que no volvió a publicar hasta tres años después³³. *Conversaciones con Pier Paolo Pasolini* tampoco fue del agrado del cuerpo de lectorado y menos aún del TOP que procedió al secuestro judicial de la edición. Aunque el caso finalmente fue sobreseído, la documentación que se conserva específica que el TOP no levantó el secuestro del libro³⁴.

La empresa, fundada en 1969, se centró inicialmente en literatura de ensayo con especial protagonismo del libro político, a través de las colecciones «Argumentos» y «Documentos», seguidas de «Cuadernos Anagrama», pequeños libros de bolsillo muy asequibles que resultaban a ojos de la Administración «panfletarios hasta en el precio». Tiene en su haber importantes logros, entre los que des-

³² Nota muy urgente sobre la editorial Estela, AGA, Cultura, 84.963. Incluye sentencia de cancelación y diversos informes sobre la editorial, solicitados ante la posibilidad de una posible nueva inscripción de la editorial en 1975. Para mayor detalle en las vicisitudes de esta editorial, véase MARTÍNEZ MARTÍN, 2011, pp. 127-141, esp. pp. 747-748.

³³ Véase VERDÚ, 2008.

³⁴ Intervención judicial en expedientes de la Sección de Ordenación Editorial: años 1970-1971, AGA, Cultura, 49.091.

taca la primera publicación legal en España de *Cuatro tesis filosóficas* de Mao Tse-Tung, dentro de su vocación por constituir una «plataforma de heterodoxos de izquierdas» donde confluyeran distintas corrientes políticas, aunando textos de inspiración anarquista con otros clásicos del maoísmo, castrismo o trotskismo, dentro de una amalgama doctrinal muy frecuente en este tipo de editoriales. Optó inicialmente por la consulta voluntaria, decantándose progresivamente, como tantas otras editoriales, por la presentación directa a depósito. Con respecto a las editoriales citadas anteriormente, Anagrama representa un caso singular, logrando sobrevivir pese a importantes conflictos con la Administración, orientando su fondo paulatinamente hacia la narrativa y otras disciplinas artísticas, sin abandonar el interés por el debate ideológico y moral, pero más en línea con los intereses de una vanguardia cultural y trasgresora, de la que formó parte importante el libro político en los primeros años de vida de la editorial³⁵.

Guadiana y Fundamentos son dos de los sellos que también figuran en el listado de editoriales conflictivos encargado por Ricardo de la Cierva, catalogadas como «de alguna conflictividad» (en el caso de Guadiana) y «sin antecedentes directos» (Fundamentos), debiendo su inclusión en el mismo a ciertos problemas con Ordenación Editorial, tal y como consta en el informe del MIT sobre la producción editorial en el bienio 1970-1971.

Guadiana, de inspiración democristiana, contaba, al igual que Edicusa y SESA, con el padrinazgo ideológico de Joaquín Ruiz-Giménez y el patrocinio de la familia Camuñas, iniciando su actividad en octubre de 1967. El proyecto atrajo a distintas figuras ubicadas no sólo en el ámbito de la democracia cristiana, sino también vinculadas a otras familias ideológicas más cercanas a posicionamientos liberales y monárquicos, contando con la colaboración de jóvenes intelectuales como Adolfo Marsillach, Amando de Miguel o López Aranguren. La solicitud de inscripción que, a diferencia de otros casos, fue aprobada en tan sólo ocho días, presentaba un plan editorial todo lo ambiguo que resultaba habitual en iniciativas de este tipo, aunque no así el hecho de declarar la existencia de una junta directiva cuya misión era «velar por la permanencia de los fines ideológicos de la sociedad». Publicaciones como *Celtiberia Show* de Luis Carandell, fueron objeto de intervención judicial, resultando también conflictiva la edición de *Cataluña, crónica de una frustración* y los polémicos anuarios de *España en perspectiva*, denunciados en sus ediciones de 1970 y 1971, con gran eco en la prensa. El primero de ellos, con una tirada real superior en 1.000 ejemplares a la declarada, fue dirigido por el propio Ignacio Camuñas, socio fundador y acreedor de diversos informes policiales que le significan dentro de la de-

³⁵ MORET, 2002a, pp. 330-341. Por su parte ROJAS CLAROS, 2013, p. 145, recoge las declaraciones de Jorge Herralde en la revista *Archipiélago*, núm. 51, junio-julio de 2002, sobre la filiación ideológica de Anagrama, al tiempo que fecha en 1968 la inscripción de la empresa basándose en el expediente 564 de inscripción en el Registro Editorial. Véase *supra* el capítulo XI.

mocracia cristiana, con «tendencia izquierdista» y activamente implicado en otros proyectos como Al-Borak o Ediciones 99, así como en diversas iniciativas orientadas a la promoción de estudios sobre problemas contemporáneos. Historial personal y bibliográfico que explica la calificación de editorial «con alguna conflictividad» otorgada a la empresa en el célebre listado de 1974³⁶.

Planteado desde distintas orillas, el maridaje entre compromiso político y activismo cultural fue constante dentro un nutrido colectivo de intelectuales, quedando patente en el elenco de accionistas y colaboradores de estas editoriales. De esta forma, volvemos a encontrar a Joaquín Ruiz-Giménez coincidiendo con Raúl Morodo, Dionisio Ridruejo, Buero Vallejo o José Antonio Maravall en SESA, acrónimo del sello Seminarios y Ediciones, S. A., otra incómoda publicación de la época, con especial impacto en el panorama cultural del momento, como ya se ha visto. El activismo de este colectivo era considerable y el eco de su labor contribuía al desgaste de un régimen que contemplaba cómo iniciativas de este calado ganaban constantemente adeptos capaces de dotar a la editorial de un capital social de 12 millones en 1976. Exhaustivos informes policiales sobre sus miembros avalan la relevancia concedida a SESA en el listado de editoriales particularmente molestas elaborado en 1974 por el equipo de Ricardo de la Cierva. La Brigada Central de Información aportó una minuciosa descripción de las actividades de protesta protagonizadas por 21 de los 84 accionistas de la editorial en aquella fecha, con especial dedicación a figuras como Enrique Tierno Galván, Fernando Chueca Goitia, López Aranguren, Dionisio Ridruejo e incluso el exministro Joaquín Ruiz-Giménez, sin omitir alusiones a Camilo José Cela, Carlos Zayas, Julián Marías o Julio Caro Baroja³⁷.

Un marco jurídico basado en la artificiosa diferencia entre «libertad de expresión» y «libertad de prensa» se revela en los últimos años del franquismo como elocuente evidencia de contradicciones más profundas, traducidas en disensiones internas dentro de las familias políticas del Régimen. Si la vocación aperturista de Pío Cabanillas no fue obstáculo para elaborar en 1974 un listado de editoriales disidentes, su destitución marca la pauta para un nuevo gabinete incapaz de controlar la crítica procedente de un sector que cada vez hacía oír más su voz a través de figuras de relevancia pública, lo que condujo a evaluar la posibilidad de adoptar medidas radicales, apoyadas en los artículos más regresivos de la Ley Fraga. Así lo demuestran informes como el que, en noviembre de 1975, llevaba a los servicios de Régimen Editorial a recomendar la cancelación de tres de las editoriales que ya se identificaban un año antes como conflictivas: Akal, Fundamentos y Ayuso³⁸.

³⁶ MARTÍNEZ MARTÍN, 2011, pp. 135-136.

³⁷ *Ibid.*, pp. 132-134.

³⁸ Informe sobre posibilidad de cancelación de inscripciones en el Registro de Empresas Editoriales, Madrid, 5 de noviembre de 1975, AGA, Cultura, 596.

Akal, creada en 1972, no tuvo dificultades para lograr su inscripción en registro en pocos meses, declarando un plan editorial centrado en enciclopedias y temáticas relacionadas con el arte, la literatura y la historia, con presencia de alguna colección infantil. Su fundador, sin antecedentes políticos en ese momento, se significó años después con la firma de iniciativas a favor de la amnistía y la abolición de la pena de muerte, mereciendo por ello el calificativo de «algo conflictivo» a la altura de 1974. Entre sus publicaciones se encuentra el célebre manual de *Historia de Roma* de Kovaliov, cuyo segundo volumen suscitó la indignación del propio Ricardo de la Cierva por el análisis del origen del cristianismo desde la óptica del materialismo histórico. Situada dentro del ámbito de las editoriales especializadas en temas de pensamiento, dio cabida al libro político con diversos altercados por la publicación de títulos tan sugerentes como *El espectáculo de la huelga, la huelga del espectáculo*, llegando a sufrir, bajo el gabinete de Martín-Gamero, diversos secuestros, entre ellos el de la obra de Santiago Carrillo, *Mañana, España*, en 1976. Dato curioso en una editorial que presentaba en su plan editorial un manual sobre cómo conducir un automóvil³⁹.

Jesús Ayuso, propietario de la librería Fuentetaja de Madrid, tampoco tuvo grandes dificultades para inscribir su editorial a finales de 1969, al carecer de antecedentes desfavorables en esa fecha y presentar un plan editorial aparentemente inofensivo. La venta en su establecimiento de obras de editoriales abiertamente disidentes y los títulos publicados por su propio sello, que omitieron el filtro de la consulta voluntaria a partir de 1973, pusieron en alerta a los servicios del MIT, aunque en este caso no pudiera alegarse un historial personal de incómodo activismo político.

Por su parte, Fundamentos, ya desde la creación en 1970, obvió los «beneficios» de la consulta voluntaria arriesgándose a secuestros como el que sufrió la publicación de la obra de Engels, *El origen de la familia, de la propiedad privada y del estado*, recogido en la relación de intervenciones judiciales durante el bienio 1970-1971 que elabora Ordenación Editorial en abril de 1972. Año en el que se publicó, con no menos arrojo, la obra *Humor viene de Humo* de Moncho Goicoechea con un primer capítulo titulado «Para un diccionario político» con interesantes definiciones sobre «guerra», «movimiento» o incluso «prensa, ley de» que no podía dejar de ser objeto de denuncia⁴⁰.

Junto a ellas, empresas individuales como Miguel Castellote Editor, Artiach Editorial o Alberto Corazón Climent (autor de las portadas de Ciencia Nueva)

³⁹ Dato anecdótico recogido por CISQUELLA, ERVITI y SOROLLA, 2002, pp. 68 y 180. Las vicisitudes de esta editorial son descritas por MARTÍNEZ MARTÍN, 2011, pp. 137-138.

⁴⁰ *Intervenciones judiciales desde 1 de enero de 1970 al 31 de enero de 1971*, AGA, Cultura, 49.091. Detalle del dictamen censor sobre la obra *Humor viene de Humo* en AGA, Cultura, 1691-72.

deben su inclusión en los informes de editoriales conflictivos a la participación de sus fundadores en actividades de protesta e iniciativas de más amplio calado orientadas a constituir un frente oposición al franquismo desde la izquierda, junto con la beligerancia percibida por los servicios de lectorado en las obras presentadas, ocasionándoles percances de distinta envergadura con la Administración⁴¹.

LA IMPRONTA DE LA TENACIDAD

La mayoría de estas editoriales no contaba con canales alternativos de distribución para los títulos más conflictivos, estando además excluidas por su trayectoria del circuito de ayudas oficiales del que se beneficiaban las grandes firmas del mercado editorial. En estas condiciones surgen iniciativas como la constitución de la plataforma Distribuciones de Enlace, con el objetivo de aunar esfuerzos a la hora de consolidar la presencia en el mercado de sus integrantes. Creada en 1970, siete editoriales catalanas (Barral, Ediciones 62 y Península, Anagrama, Fontanella, Lumen, Tusquets y Estela, más tarde Laia) y una madrileña (Cuadernos para el Diálogo) incorporada más tarde, concibieron una vía de comercialización alternativa con la colección «Ediciones de Bolsillo», de gran impacto en círculos universitarios, principal destino de los títulos ofertados. El proyecto daba cuerpo al frente común que tradicionalmente habían formado estas editoriales ante los constantes problemas con la Administración⁴².

Mientras Barral, Lumen y Tusquets se orientaban hacia una vertiente más artística y literaria, Anagrama se centró originalmente en un discurso de izquierdas con el libro político como señuelo, seguida por Fontanella y Laia, cuyos orígenes se vinculaban a la beligerancia del cristianismo marxista, encontrando cada una su nicho bajo la voluntad de ampliar la distribución dentro de un mercado de por sí minoritario. Las dificultades para coordinar internamente la actividad de tal crisol de proyectos se relacionan con las vicisitudes financieras de la distribuidora, acentuadas por el impacto del entramado sancionador de la Administración. En este contexto, sucesos como el ocurrido en 1974 con el incendio de sus locales en Barcelona, a consecuencia del más sonado atentado provocado por bandas ultraderechistas en aquel año, suponían un importante varapalo con daños valorados en más de diez millones de pesetas⁴³.

Reseñable es el impulso dado por un colectivo amplio de artistas e intelectuales cuyo compromiso social se traduce en abierto activismo político de filia-

⁴¹ Véase MARTÍNEZ MARTÍN, 2011.

⁴² Detalle sobre «Edición de Bolsillo» y «Distribuciones Enlace» de la mano del propio Carlos Barral en documentación remitida por el editor al subdirector general de Cultura Popular y Espectáculos, Barcelona, 30 de noviembre de 1970, AGA, Cultura, 49.085.

⁴³ Sobre este proyecto MORET, 2002a, pp. 342-358.

ción muy diversa, pero con el común denominador de un antifranquismo que desempeñó en el campo de la cultura su principal baza, convirtiendo al libro en un instrumento activo de disidencia, por contenido y continente, confiando a la edición un especial protagonismo como herramienta pedagógica, a la que se supeditaba toda consideración financiera. Se trata de proyectos que, como *Cuadernos para el Diálogo*, tuvieron un calado incuestionable en el ámbito universitario, pero cesaron su actividad con el cambio del panorama político, integrándose buena parte de sus promotores a lo largo de los años ochenta en la dinámica de los partidos políticos de la recién inaugurada democracia.

Otras iniciativas fueron promovidas por jóvenes inconformistas, militantes en muchos casos de formaciones comunistas o de inspiración cristiano-sindicalista, centrando su actividad sobre un libro político que entendían como elemento activo de agitación social, buscando proyectarse sobre colectivos ajenos al mundo universitario a través de canales de distribución que llegaban hasta las fábricas y otros centros de potencial conflictividad. Su actividad fue reprimida con especial crudeza, siendo expresamente clausuradas o viendo condicionada su viabilidad económica con frecuentes denuncias, sanciones o secuestros que obligaban al cierre de empresas con escasos recursos.

La tenacidad fue la nota predominante en este colectivo de editoriales, por el despliegue de tácticas desarrolladas para sortear la acción de la censura y por la audacia de asumir evidentes riesgos al amparo de su eco mediático, haciendo patente la ineficacia de los mecanismos de control habilitados por el marco jurídico. Sólo a modo de ejemplo, recordemos el importante reclamo publicitario que podía suponer para los lectores la aplicación del artículo 72 de la Ley Fraga, con la inserción de sentencias en la propia publicación, obviamente un efecto contrario al previsto por los legisladores.

En este sentido, cabe mencionar el protagonismo en los catálogos de estas editoriales no sólo de textos expresamente políticos, sino también de obras que invitaban de forma más o menos encubierta a reflexionar sobre la actualidad a partir del recuerdo de acontecimientos pasados. Las obras de historia cobran cierto protagonismo en el esfuerzo por presentar cara a la historiografía oficial, dentro del auge de las ciencias sociales, del que se hacen eco de forma especial estas editoriales. En este sentido, la reescritura del presente en clave de humor recoge la tradición satírica de oposición al poder tan extendida en el siglo XIX, siendo recuperada en estos años con redoblado impulso. Los chistes gráficos de Chumy-Chúmez publicados por algunas de estas editoriales (en ocasiones presentados como auténticos ensayos políticos) o el tirón de mercado de *Celtiberia Show* o *Celtiberia bis* constituyeron algunos de los grandes éxitos de estas editoriales en su afán por divulgar una visión crítica de la realidad política y social del momento⁴⁴.

⁴⁴ Vicisitudes con la censura de algunas de estas obras descritas en el capítulo titulado «El humor como arma de combate político» de ROJAS CLAROS, 2013, pp. 281-291.

Con la politización creciente del panorama social y cultural en las postrimerías del franquismo, estas empresas tuvieron una trascendencia cualitativa en la oferta editorial, en particular dentro del ámbito universitario, con la publicación de colecciones emblemáticas de cuya mano se introdujeron en el mercado español títulos y autores señeros en el panorama internacional. Bien es cierto que, fuera del contexto estudiantil, determinados colectivos también se encontraban sensibilizados respecto a temas de actualidad nacional e internacional, lo que implicaba de forma indirecta una relativa demanda del libro político en los términos en que lo concebían estas editoriales. Esta demanda descendió con el advenimiento de la democracia, terminando por perder sentido la actividad de aquellos sellos volcados en este género, tal y como declaraban en su cierre los propios fundadores de Zero-ZYX. Caso distinto fue el de empresas que dieron cabida puntual en su catálogo a estos títulos, haciéndose eco de la demanda de mercado en ese momento, o de aquellas otras cuya disidencia se relaciona con una vocación trasgresora de más amplio calado. En uno y otro caso, el paso de los años y el cambio en su público objetivo les llevará a trasladar el foco hacia otras temáticas de tinte alternativo al axioma oficial en cada momento.

Pero, pese a su proyección minoritaria dentro del mercado, la trayectoria de estas editoriales y el protagonismo del libro político dentro de su catálogo revelan las carencias de un discurso aperturista que no podía seguir apelando a la paz social como clave de su permanencia, al tiempo que se revelaba incapaz de controlar la producción a través del marco jurídico y administrativo, ni de canalizar una demanda en proceso de reconversión sólo sobre iniciativas como la que representa el lanzamiento de la colección «Libros RTV» o la creación de empresas editoriales patrocinadas por organismos oficiales. Control editorial y bibliográfico cuya inercia se prologará más allá de la muerte de Franco con un repunte del volumen de denuncias en los primeros años de la Transición⁴⁵.

Dentro de una espiral de politización creciente en la vida pública y el mundo de la cultura, estas empresas protagonizaron una importante labor de desgaste al promover una corriente de pensamiento crítico perceptible por el ciudadano medio, principal protagonista de un cambio de mentalidad y comportamiento, que, a través de los medios de comunicación y de la renovación de la oferta en los escaparates de las librerías, constataba un cambio de rumbo en el que ya no había marcha atrás⁴⁶.

⁴⁵ *Ibid.*, pp. 304-306. Resulta ilustrativo en este sentido un somero repaso a los teletipos que se conservan con noticias sobre presentaciones de libros, secuestros de ediciones y quejas del gremio de libreros, en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco. A modo de ejemplo, véanse *Teletipos sobre atentados a librerías y presentaciones, secuestros y demás sucesos relacionados con libros concretos, 1975-1977*, AGA, Cultura, 581.

⁴⁶ Véase *supra* el capítulo XII.